

revisado el proceso instruido contra Apolonio Barriga, llamando la atención del C. Magistrado de Circuito, Lic. Aurelio R. Portugal, sobre el contenido del artículo 24 de la ley de 14 de Febrero de 1826 que ha citado.

México, Noviembre 14 de 1873.—*Altamirano.*

Auto de revisión de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 18 de 1873.—Como pule el Señor Fiscal.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Enrique Landa,* secretario.

Es copia. México, Diciembre 6 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte.*

AMPARO

Promovido por D. Julián Sobrino ante el juzgado 1º de Distrito de esta Capital, contra los procedimientos del C. Juez 5º del ramo civil, en el juicio que le promovió D. Severino Comis, sobre pago de un crédito escriturario.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Dr. Julian Sobrino, quejándose de que ante el juzgado 5º de lo civil se sustancia en su contra un juicio hipotecario intentado por D. Severino Comis, bajo la sustanciación establecida por el nuevo Código de procedimientos, tratándose de una obligación hipotecaria de fecha anterior á la promulgación de dicho Código, designando como garantía violada, la que otorga el artículo 14 de la Constitución.

La cuestión en concreto está reducida á lo siguiente: ¿Es aplicable el Código de procedimientos á los contratos celebrados antes de su promulgación? Después de la discusión sostenida por las partes interesadas, ante la justicia federal, y las resoluciones acordadas por la Suprema Corte de Justicia, no puede vacilarse en la regla que debe adoptarse para casos como el presente. Es evidente que en materia de procedimientos, conforme á los principios generales del derecho, jamás podrá decirse que hay retroactividad en su aplicación, aunque se verifique respecto á contratos anteriores, mas esto tiene lugar en cuanto á la forma de los juicios que es la que determina la sustanciación, mas cuando alteran la esencia del contrato, lo que practica el Código dando un precio que no era conocido ni pensado al contratarse, sí existe el acto de retrotraer la ley, y existe la violación del artículo constitucional reclamado. Esta consideración ha servido de base para que la Suprema Corte de Justicia amparase en casos idénticos á los CC. Felipe Berriozabal y Antonio Sanchez del Rio, y si bien es verdad que conforme á la ley de 20 de Enero de 1869, las sentencias no causan ejecutoria, si son muy atendibles cuando entrañan la aplicación del derecho constitucional á los casos ocurrentes. Por lo expuesto, puede el juzgado declarar: Que la Justicia federal ampara y protege al C. Julian Sobrino.

México, Noviembre 6 de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*H. de A. Osorno,* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Noviembre 12 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por D. Julian Sobrino, quejándose de que en el juicio hipotecario seguido ante el C. Juez 5º del ramo civil de esta ciudad, á pedimento de D. Severino Comis, resulta violada en per-

juicio del mismo Sobrino, la garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución política de la República Mexicana, por haber sustanciado y resuelto dicho juicio con arreglo al Código Novísimo de procedimientos á que se le da efecto retroactivo, aplicándolo al contrato celebrado antes de su promulgación. Vistos el informe dado por el referido C. Juez 5º; la prueba que rindió el interesado con lo que alega en su defensa; lo pedido por el representante del Ministerio público y demás constancias de autos á las que en lo necesario me refiero, y considerando: Primero: que la escritura presentada para acreditar la deuda, es de 15 de Marzo de 1867, consignando un contrato celebrado cerca de siete años antes, y mandado cumplir judicialmente. Segundo: que de ese contrato no pudieron derivarse mas obligaciones del deudor ni otros derechos respecto del acreedor, que los que eran su consecuencia segun las leyes vigentes al tiempo de su celebracion, porque el derecho comun se toma como base y supuesto necesario de las estipulaciones. Tercero: que es circunstancia muy importante en todo contrato, lo que se halle establecido acerca del modo y términos con que ha de llevarse á efecto judicialmente, y cualquiera alteracion en este punto, siempre que no dependa de hechos imputables á los contrayentes y les cause perjuicio, los hace de peor condicion y los priva de derechos legítimamente adquiridos. Cuarto: que la ley que impone tal gravámen aunque lleve el nombre y apariencia de procedimiento en la realidad, y fijándose en sus resultados prácticos, no se limita á variar el modo de enjuiciar, sino que cambia sustancialmente la esencia de la obligacion. Quinto: que el Código de procedimientos Novísimo del distrito federal, introduce en el derecho hipotecario alteraciones tan sustanciales, como la de convertir en principal y aun en única, la obligacion que conforme á la ley del tiempo en que se contrajo era subsidiaria; restringir considerablemente las escepciones que for-

man parte del derecho antes estipulado; precisar á dar en pago la cosa hipotecada por un valor mucho menor que el de dos tercios que era hasta donde permitia bajar la ley antigua, y otros efectos tambien importantes que no es necesario enumerar. Sexto: que esas disposiciones del Código de procedimientos, son parte integrante para la práctica del nuevo sistema hipotecario creado por el Código civil, y por esto no son ni se pueden llamar medios de ejecucion de obligaciones contraídas con arreglo al antiguo sistema hipotecario, sino sólo de las que el Novísimo Código establece. Séptimo: Que esta indivisible conexión y gravosa dependencia de ambos Códigos en la materia de que se trata, hace que no puedan aplicarse las disposiciones del uno, sino presupuestas las inovaciones del otro, y de esta manera la novedad no afecta sólo el procedimiento, sino tambien el derecho ejercitado en su esencia, verificándose de este modo el efecto retroactivo que prohíbe la Constitución en su artículo 14, y de consiguiente, causando la violacion de la garantía individual que se reclama. Por cuyas consideraciones, y atendiendo á lo pedido por el Promotor fiscal, debia declarar y declararé: que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. Julian Sobrino, contra los procedimientos en el juicio hipotecario y sentencia que les puso término practicados por el C. Juez 5º de lo civil á pedimento de D. Severino Comis, fundado en la escritura de imposición, sobre los ranchos de San Vicente, San Alejo y San Diego Tlasala, en favor de la testamentaria del Señor Obispo D. Joaquín Fernandez Madrid, en 14 de Marzo de 1867. Hagase saber esta sentencia; publíquese en la forma acostumbrada, y dese cuenta con las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia.

El C. Juez lo mandó y firmó.—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 11 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Julian Sobrino, ante el juzgado 1º de Distrito de esta Capital, contra los procedimientos del C. Juez 5º del ramo civil, en el juicio que le promovió D. Severino Comis, sobre pago de un crédito escriturario. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el quejoso; la sentencia del inferior y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propias consideraciones y legales fundamentos, la sentencia del juzgado 1º de Distrito, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. Julian Sobrino, contra los procedimientos del C. Juez 5º de lo civil en el juicio hipotecario que le promovió D. Severino Comis. Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 17 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por Don Enrique Sanroman, contra el cobro que le hace la Aduana Marítima de ese puerto, del impuesto denominado derecho de bultos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Enrique Sanroman, importó en los dias 6 y 7 del próximo pasado mes con los permisos número 8 y 19, tres cajas puros de la Habana y 40 sacos café del rio, y como la Administracion Marítima de este Puerto le exigiera el derecho de bultos, y por su resistencia le detuvieron una caja puros y dos sacos café, interpuesto el recurso de amparo y para sentenciarlo, ha corridosele traslado por tres dias que se vencen el dia de mañana.

Por el certificado de fojas 48, consta: que el Sr. Sanroman, pagó el derecho de bultos del efecto importado con el permiso número 8, y por consiguiente, el recurso queda reducido á lo practicado respecto del otro permiso número 19, y en esta inteligencia pasa adelante la Fiscalia.

La cuestion que ahora se agita, no es, si debió ó no cobrarse el derecho de bultos criado por la ley de 19 de Noviembre de 1867, mientras rigió el antiguo Arancel de 31 de Enero de 1856; sino si debe seguirse cobrando, desde que comenzó á observarse el nuevo arancel de 1º de Enero de 1872.

Aquella nó la toca ni tiene necesidad de examinarla la Promotoria, por que el derecho se cobró, y es ya hoy ese cobro un hecho consumado que no se reclama, por que el comercio se prestó á pagarlo cualquiera que fuese la razon de obediencia á una ley general esplicita que lo imponia, y que al hacerlo no estableció distincion alguna entre las Aduanas de la Zona y las que se